



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.
SUSCITADO ENTRE INGRID ESTERAI
GUIDO MONTES DE OCA Y EL
DIRECTOR GENERAL DE CASAS DE
LA CULTURA JURÍDICA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN.**

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del veintidós de octubre de dos mil doce.

**VISTOS; Y,
RESULTANDO:**

PRIMERO. INGRID ESTERAI GUIDO MONTES DE OCA mediante recurso presentado el dieciséis de noviembre de dos mil once y mediante el que desahogó la prevención y que se presentó el uno de diciembre de ese mismo año, ante la mesa de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, demandó lo siguiente:

"La reincorporación o instalación en el trabajo en el puesto que venía desempeñando, igualmente el nombramiento, lugar, horario, salario y prestaciones que tenía, del mismo modo: a).- El pago de las vacaciones y prima vacacional concerniente desde el treinta de abril de dos mil diez hasta se me reincorpore o instale en mi cargo. b).- El pago de los



LA FEDERACIÓN
CORTA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN

estímulos e incrementos salariales que se hayan realizado al puesto que venía desempeñando. c).- El pago de los aguinaldos correspondientes desde dos mil diez hasta el momento que se me reincorpore o instale. d).- El pago de los salarios caídos a partir del treinta de abril de dos mil diez, fecha en que fui inmerecidamente separada de mi cargo, hasta el día en que sea reincorporada o instalada en el mismo, o en su caso cubiertas todas y cada una de las prestaciones que me corresponden por el despido injustificado de que fui objeto. e).- El pago de la ayuda de despensa desde dos mil diez hasta que me reincorpore o instale. f).- El pago de las prestaciones denominadas asignaciones adicionales que se otorgan: la primera de enero a marzo, la segunda de abril a julio y la tercera de agosto a noviembre desde el momento de la separación de mi plaza hasta que se me reincorpore o instale.

PARA EL CASO DE QUE NO SEA REINCORPORADA O INSTALADA EN EL TRABAJO QUE VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE DEMANDA INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTES SEÑALADO, LO SIGUIENTE: a).- El pago de la Indemnización Constitucional consistente en tres meses de salario por el despido injustificado de que fui objeto, a razón de 39,940.08 pesos mensuales más prestaciones, por ser el salario que percibía mensualmente, más los incrementos que se haya tenido y siga teniendo. b).- El pago de la antigüedad



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

en el trabajo consistente en 20 días por cada año laborado conforme a los establecido en el artículo 50 fracción II de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria. c).- El pago de la prima de antigüedad en el trabajo consistente en 20 días por cada año laborado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria. d).- El pago de las horas extras laboradas para la demandada Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la antes llamada Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en el servicio prestado en promedio cuatro horas por día, del mismo modo las comisiones que fueron encomendadas en fines de semana, las cuales no se encuentran contempladas en mi jornada u horario."

La demanda se apoyó en los hechos siguientes hechos:

1. "Con fecha primero de junio de dos mil siete la suscrita contraté mis servicios con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el nombramiento interino de Oficial de Servicios, rango "C", puesto de base, con horario de trabajo de las 8:00 a las 20:00 horas, horario que nunca se me respetaba ya que la suscrita a veces laboraba hasta las 23:00 o 24:00 horas de la noche, con un salario mensual de 9,753.91 pesos mensuales estableciéndome como lugar para prestar mi trabajo el ubicado en 16 de Septiembre, No. 38

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc en esta ciudad CP 06000, como se acredita con el nombramiento que se anexa a este escrito en original y copia para que se certifique la copia y me sea entregado el original.

2. El último nombramiento que se me asignó fue de Subdirectora de Área rango "B" con un salario mensual de 45,065.54 pesos mensuales.
3. Se me asignó como último horario de trabajo de las 8:00 horas de la mañana a las 23:00 o 24:00 horas de la noche, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una hora para tomar alimentos en algunas ocasiones ya que a veces por la carga de trabajo no se me permitía ni una hora para tomar alimentos, laborando de lunes a domingo por la carga de trabajo que la corte tenía y debido a que en ocasiones la suscrita era comisionada a diversos lugares fuera del centro de trabajo por lo que laboraba incluso días inhábiles para la demandada como lo acredito con los oficios de comisión y viáticos que me fueron asignados por la demandada en diferentes fechas, documentos que anexo a este escrito para todos los efectos legales a que haya lugar y con los cuales se acredita que la suscrita trabajaba más allá de mi jornada de trabajo y más de cuatro horas diarias de lunes a domingo, por lo que desde este momento se solicita se gire oficio a la Dirección General de la Tesorería de la Suprema Corte de Justicia de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

Nación ubicada en 16 de Septiembre número 38, Colonia Centro en esta ciudad de México Distrito Federal, a efecto de que informe las comisiones que fueron asignadas durante el periodo comprendido del año 2007 al 2010. Violando con ello el convenio sobre descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 ratificado por México el 01:06:1959; situación vigente de la Organización Internacional del Trabajo.

4. 3. (sic.) Con fecha 25 de septiembre de 2008 el Secretario Ejecutivo de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la –Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, determinó iniciar, de oficio, el cuaderno de investigación respecto de los hechos informados en el oficio SEJA-766/08 del Secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo; dicho cuaderno quedó registrado como C.I. 65/2008 mismo que dio origen al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado en la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número P.R.A 65/2008, ambos resueltos con fecha diecinueve de septiembre del año dos mil once por Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, QUE EN SU ÚNICO RESOLUTIVO resuelve: 'ÚNICO. Es improcedente el procedimiento de responsabilidad administrativa a que este expediente 65/2008 se refiere.'
5. Con fecha ocho de marzo de dos mil diez y con fundamento en el Acuerdo General de Administración V/2008, se inicia el procedimiento de baja, por

pérdida de la confianza; procedimiento arbitrario que debió de considerarse nulo de pleno derecho, en virtud de que el procedimiento de Responsabilidad Administrativa aún no se había dado por terminado, y mucho menos se había declarado que la suscrita fuera responsable o se comprobara su probable responsabilidad de los actos que se le imputaban en la investigación que había dado origen al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

6. Mediante oficio número DGP/DRL/194/2010, se me informó que con fundamento en el artículo 42 fracción II, primer párrafo, del Acuerdo General e Administración V/2008 y a petición del Titular de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos y de la Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa de este Alto Tribunal, me notificaron el inicio del procedimiento de baja por pérdida de la confianza, fue un procedimiento violatorio a mis derechos en virtud que si aún no se había determinado la responsabilidad de la suscrita con los procedimientos C.I. 65/2008 y el P.R.A. 65/2008, por lo que no debió de iniciarse dicho procedimiento y mucho menos debió de haberse celebrado la sesión de fecha 15 de abril de 2010 en la cual el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Séptima Sesión Ordinaria tomó un acuerdo precipitado violando mis derechos y garantías contempladas tanto por la Ley Burocrática, Ley Federal del Trabajo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

y por convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo.

7. La demanda con fecha 30 de abril del 2010 ordenó arbitrariamente la baja de la suscrita por pérdida de la confianza, sin haberse concluido el procedimiento de responsabilidad administrativa, sin tomar en cuenta y tener acreditados los supuestos actos que me fueron imputados y que fueron los que supuestamente dieron origen a mi baja por pérdida de la confianza, con lo cual se violaron mis más elementales derechos laborales y garantías, por lo que todo lo anterior se equipara a un despido injustificado por parte de la demanda de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
8. En virtud de que al momento que fui dada de baja arbitrariamente por la demanda se me dejaron de cubrir todas las prestaciones a que tengo derecho en los términos de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, motivo por el cual se está planteando la presente demanda."

Asimismo, se ofrecieron las siguientes pruebas:

- "1.- CONFESIONAL.- A cargo de la demandada Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las posiciones que se le articularan en su oportunidad, esta prueba deberá ser desahogada por conducto de la persona física que acredite ser el representante

legal y tener facultades para absolver posiciones, debiendo ser citada por conducto de su apoderado, con los apercibimientos de ley correspondientes para el caso de que no comparezca sin justa causa se le declare fictamente confeso de todas las posiciones que sean calificadas previamente de legales. Esta prueba se relaciona con todos los hechos del escrito inicial de demanda.

II.- LA CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS.- A cargo del C. Secretario Ejecutivo de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las posiciones que se le articularán en su oportunidad, esta prueba deberá de ser desahogada en forma personalísima y no por conducto de apoderado, debiendo ser citado por conducto de esta H. Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, en 16 de Septiembre número 38 Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06060, en esta Ciudad, en virtud de que ahí presta sus servicios para la demandada, con los apercibimientos de ley correspondientes para el caso de que no comparezca sin justa causa se le declare confeso de todas las posiciones que sean calificadas de legales. Esta prueba se relaciona con el hecho 3.

III.- DOCUMENTAL.- Consistente en Recibos de Pago número 017396, 014395, 99572, 005797, 78711, 77631, 82448, 73627, 64560, 70624, con los cuales se acredita el salario integrado que percibía, la suscrita por parte de la Suprema Corte de Justicia de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

la Nación. Esta prueba se relaciona con todos los hechos del escrito de demanda.

Y para el caso que las documentales, sean objetadas, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento el cotejo que se haga con los originales que obran en poder de la demandada sito en Pino Suárez, No. 2, Colonia Centro, en esta Ciudad.

IV.- DOCUMENTAL.- Consistente en oficio número DGP/DRL/194/2010 de fecha 12 de Marzo de 2010, signado por el Director General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, LIC. MANUEL JUAN CORVERA CARAZA. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito inicial de demanda.

Y para el caso de que esta documental, sea objetada, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento el cotejo que se haga con los originales que obran en poder de la demandada sito en Pino Suárez, No.2, Colonia Centro, en esta Ciudad.

V.- DOCUMENTAL.- Consistente en oficio DGCCJEH-J-175-03-2010 de ocho de marzo de dos mil diez, signado por los C. JUEZ JUAN JOSÉ FRANCO LUNA, Director General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos y por el Maestro ALFONSO OÑATE LABORDE Secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito inicial de demanda.

Y para el caso de que esta documental, sea objetada, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ratificación de contenido y firma a cargo de los C. Juan José Franco Luna y Alfonso Oñate Laborde, debiendo de ser citados en el domicilio de la demandada sito en Pino Suárez, No. 2, Colonia Centro, en esta Ciudad.

VI.- DOCUMENTAL.- Consistente en oficio número DGP/DRL/268/2010 de fecha veinte de abril de dos mil diez, signado por el Director General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, LIC. MANUEL JUAN CORVERA CARAZA. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito de demanda.

Y para el caso de que esta documental, sea objetada, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento el cotejo que se haga con los originales que obran en poder de la demandada sito en Pino Suárez, No. 2 Colonia Centro, en esta Ciudad.

VII.- DOCUMENTAL.- Consistente en oficio número SSCM/840/2010 de fecha veinte de abril de dos mil diez, signado por el Secretario de Seguimiento de Comités de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, LIC. ALEJANDRO ROLDAN OLVERA. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito de demanda.

Y para el caso de que esta documental, sea objetada, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento el cotejo que se haga con los originales que obran en poder de la demandada sito en Pino Suárez, No.2 Colonia Centro, en esta Ciudad.

VIII.- DOCUMENTAL.- Consistente en oficio número SSCM/842/2010 de fecha veinte de abril de dos mil



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

diez, signado por el LIC. ALEJANDRO ROLDAN OLVERA, Secretario de Seguimiento de Comités de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito de demanda.

Y para el caso de que esta documental, sea objetada, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento el cotejo que se haga con los originales que obran en poder de la demanda cito en Pino Suárez, No. 2, Colonia Centro, en esta Ciudad.

IX.- DOCUMENTAL.- Consistente en la copia certificada que remita la Secretaría de Seguimiento de Comités de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con domicilio en Pino Suárez No.2, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc en esta Ciudad de México Distrito Federal, en la sesión del 15 de abril de 2010 en la séptima sesión ordinaria del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como copia certificada el informe rendido por la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en dicha sesión. Esta

prueba se relaciona con todos los hechos de mi escrito inicial de demanda.

X.- DOCUMENTAL.- Consistente en oficio número DGCCJEH-J-322-04-2010 de fecha 20 de abril de 2010, signado por los C. JUEZ JUAN JOSÉ FRANCO LUNA Director General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos y por el Maestro ALFONSO OÑATE LABORDE Secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito de demanda.

Y para el caso de que esta documental, sea objetada, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento el cotejo que se haga con los originales que obran en poder de la demandada sito en 16 de Septiembre, No. 38 Colonia Centro de esta Ciudad.

XI.- DOCUMENTAL.- Consistente en oficio número CSCJN/DGRARP/DRP/1612/2007 de fecha ocho de octubre de dos mil siete, signado por el LIC. LUIS GRIJALVA TORRERO Secretario Ejecutivo de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Documento que se agrega a este escrito en original y copia a efecto de que se certifique la copia y me sea devuelto el original. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito de demanda.

Y para el caso de que esta documental, sea objetada, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento el cotejo que se haga con los originales que obran en poder de la demandada sito en 16 de Septiembre, No. 38 Colonia Centro de esta Ciudad.

XII.- DOCUMENTAL.- Consistente en oficio número DGCCJEH/DCP-E-033-10-2007 de fecha tres de octubre de dos mil siete, signado por el Maestro en Derecho César de Jesús Molina Suárez, Director General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos. Documento que se agrega a este escrito en original y copia a efecto de que se certifique la copia y me sea devuelto el original. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito de demanda.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-85

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

Y para el caso de que esta documental, sea objetada, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento el cotejo que se haga con los originales que obran en poder de la demandada sito en 16 de Septiembre, No. 38 Colonia Centro de esta Ciudad.

XIII.- DOCUMENTAL.- Consistente en Hoja de Control, de la suscrita con puesto de Jefe de Departamento, signado por el Maestro en Derecho César de Jesús Molina Suárez, Director General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos. Documento que se agrega a este escrito en copia. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito inicial de demanda.

Y para el caso de que esta documental, sea objetada, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento el cotejo que se haga con los originales que obran en poder de la demandada sito en 16 Septiembre, No. 38, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc en esta Ciudad.

XIV.- DOCUMENTAL.- Consistente en oficio número CSCJN/DGARARP/DRP/1470/2007 de fecha dos de agosto de dos mil siete, signado por el Secretario Ejecutivo de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Licenciado LUIS GRIJALVA TORRERO. Documento que se agrega a este escrito en original y copia a efecto de que se certifique la copia y me sea devuelto el original. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito de demanda.

Y para el caso de que esta documental, sea objetada, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento el



cotejo que se haga con los originales que obran en poder de la demandada sito en 16 de Septiembre, No. 38, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc en esta Ciudad.

XV.- DOCUMENTAL.- Consistente en Hoja de Control, de la suscrita con puesto Oficial de Servicios, adscrita a la Dirección General Adjunta de Casas de la Cultura Jurídica, signado en el renglón correspondiente a "Vo. Bo. DEL TITULAR DEL AREA" Lic. ALEJANDRO JIMENEZ LÓPEZ, Director General Adjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Documento que se agrega a este escrito en copia. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito de demanda.

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE D
SUBSECRETARIA

Y para el caso de que esta documental, sea objetada, desde ahora se ofrece para su perfeccionamiento el cotejo que se haga con los originales que obran en poder de la demandada sito 16 de Septiembre, No. 38, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc en esta Ciudad.

XVI.- DOCUMENTAL.- Consistente en escrito de fecha dieciocho de marzo de dos mil diez escrito mediante el cual la suscrita oportunamente conteste dentro del plazo que me fue concedido en los oficios DGP/DRL/194/2010, manifestando mi oposición al mismo en virtud de que en el mismo no se dictaron las medidas cautelares establecidas por el artículo 41 del Acuerdo Plenario 9/2005, violándose con ello mis más elementales garantías, de seguridad jurídica, legalidad, garantía de audiencia, ser oído y vencido en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

juicio, lo que en el caso que nos ocupa no aconteció, aunado a que el procedimiento de responsabilidad aún no estaba concluido y aún no se resolvía por el Pleno de la Corte violándose con ello las más elementales garantías Constitucionales contempladas en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta prueba se relaciona con los hechos del escrito de demanda.

XVII.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada el acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 19 de Setiembre de 2011, documento que se anexa a este escrito para todos los efectos legales a que haya lugar. Esta prueba acredita fehacientemente que fue improcedente el procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en mi contra, resolución que puso fin al C.I. 65/2008 y P.R.A. 65/2008. Esta prueba se relaciona con todos los hechos de mi escrito inicial de demanda.

XVIII.- DOCUMENTALES.- Consistentes en 23 oficios de Comisión/viáticos del año 2007 al año 2010, de algunas de las comisiones a las que la suscrita fui enviada. Esta prueba se relaciona con todos los hechos de mi escrito inicial de demanda.

XIX.- DOCUMENTAL.- Consistente en informe que rinda la Dirección General de la Tesorería de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con domicilio en 16 de Septiembre Número 38 Colonia Centro, en esta Ciudad de México Distrito Federal, respecto de las comisiones y viáticos recibidos por la actora en el

presente procedimiento del periodo comprendido del 01 de Junio de 2007 a Abril de 2010. Esta prueba se relaciona con todos los hechos de mi escrito inicial de demanda.” (fojas 97 a 016 del expediente 4/2011-C).

SEGUNDO. Por auto de nueve de diciembre de dos mil once, la Tercer Integrante y Presidenta de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación ordenó la formación del expediente respectivo, el que registró con el número 4/2011-C y ordenó correr traslado y emplazar al demandado Director General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reclamándole las prestaciones que de los citados escritos se desprenden (Foja 109).

TERCERO. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil doce, ante la mesa de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación (fojas 126 a 177), Francisco Tortolero Cervantes, en su carácter de Director General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio contestación a la demanda dentro del plazo legal, en los siguientes términos:

En relación con el objeto de la demanda manifiesto que la actora carece de acción y derecho para solicitar su reincorporación o instalación en el puesto de Subdirector de Área, Rango B, puesto de confianza, pues su baja del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

servicio fue consecuencia del procedimiento de baja promovido en su contra por los entonces Director General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos y el Secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo pertinente señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIV, Constitucional, la estabilidad de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión está supeditada al principio de reserva de ley y debido a que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no contempla dicha estabilidad para los trabajadores de confianza, el hecho de que se haya previsto en un Acuerdo General de Administración VI/2008, artículo 42 la necesidad de escuchar a los trabajadores de confianza antes de darlos de baja con objeto de evitar arbitrariedades, no llega al extremo de otorgar estabilidad en el empleo a los trabajadores de confianza.

Además, el demandado adujo que la acción de la actora se encontraba prescrita, atendiendo a la fecha en que se le notificó la baja del servicio 26 de abril de 2010 con efectos a partir del 30 de abril de 2010 y la fecha en que presentó su demanda ante esa Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación mediante sus escritos de fechas 16 de noviembre y 1º de diciembre de 2011, es decir, se excedió en el tiempo para la interposición de su reclamación.

Por otra parte manifestó que la actora carecía de acción y derecho para reclamar el pago de las vacaciones y prima vacacional desde el 30 de abril de 2010, en virtud de que a ésta se le cubrió dicho concepto derivado de la petición que realizó al Alto Tribunal mediante la "Solicitud para el cobro de Prima Vacacional y Vacaciones" de fecha 19 de mayo de 2010, que se exhibe en copia simple a esta contestación como prueba documental, y que acredita el pago mediante la nómina normal del 1 al 15 de julio de 2010 por un monto neto de \$12,556.51 moneda nacional, dicho numerario se depositó en la cuenta que al efecto tiene en el Banco HSBC, por lo que **OPUSO LA EXCEPCIÓN DE PAGO** en relación a las vacaciones y prima vacacional correspondientes al año 2010. En cuanto a los demás años es improcedente su reclamo, derivado del hecho de que con fecha 30 de abril de 2010 tuvo efectos la baja de la actora autorizada por el Comité de Gobierno y Administración, por tal motivo la demandante no generó el derecho a las vacaciones y prima vacacional correspondiente por la remoción de que fue objeto.

En cuanto al pago de los "estímulos" o incrementos salariales, manifestó que eran improcedentes, en razón de que, se trata de una reclamación accesorio de la principal (reinstalación), por lo que si ésta es improcedente lo será también aquella.

Por lo que se refiere a los aguinaldos correspondientes desde dos mil diez y años



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

subsecuentes, aclaró que a la ahora actora se le cubrió dicho concepto proporcional al año en cita, derivado de la petición que realizó al Alto Tribunal mediante la "Solicitud para el cobro de AGUINALDO" de fecha 19 de mayo de 2010, que se exhibe en copia simple a esta contestación como prueba documental, y que acredita el pago mediante las nóminas extraordinarias de aguinaldo primera y segunda parte por un monto neto en la primera exhibición de \$13,504.11 moneda nacional, y en la segunda exhibición un monto neto de \$2,441.86 moneda nacional, dichos numerarios se depositaron en la cuenta que tiene en el Banco HSBC, por lo que **OPUSO LA EXCEPCIÓN DE PAGO** en relación al aguinaldo proporcional al año del 2010. En cuanto a los demás años es improcedente su reclamo, derivado del hecho de que con fecha 30 de abril de 2010 tuvo efectos la baja de la actora autorizada por el Comité de Gobierno y Administración, por tal motivo la demandante no generó el derecho correspondiente a los aguinaldos futuros por la remoción de que fue objeto.

§ También negó la procedencia de los salarios vencidos a partir del 30 de abril de 2010 fecha en que fue separada de su cargo hasta el día en que sea reincorporada o instalada en el mismo, al no existir fundamento de hecho o de derecho para tal reclamación, ya que el derecho a recibir el pago de los salarios caídos se genera en caso de que exista un despido injustificado, por lo que al no haberse despedido o cesado los efectos del nombramiento de la C. Ingrid Esterai Guido Montes

de Oca en forma injustificada, la condena a su pago es improcedente. Asimismo, al ser una prestación accesorio de la acción principal de reinstalación intentada por la parte actora, deberá seguir la suerte de esta última.

El pago de la prestación de ayuda de despesa, se consideró improcedente por el demandado, en razón de que es un beneficio aplicable al personal que se encuentra activo en la fecha de pago que fue en el mes de noviembre de 2010, por lo tanto al haber causado baja del servicio derivada de la remoción notificada el 26 de abril de 2010 con efectos de la misma a partir del 30 de abril de 2010 no se encontraba en los supuestos de norma para ser beneficiaria del pago, por lo cual **OPUSO LA EXCEPCIÓN DE PLAZO Y CONDICIÓN NO CUMPLIDA ADICIONAL A LA DE PRESCRIPCIÓN**

SECCIÓN JUDICIAL
SUPREMA CORTA
SUBSECRETARÍA

El pago de la prestación denominada asignaciones adicionales es improcedente; derivado del hecho de que ya se cubrió la parte que le correspondía, pues al haber causado baja del servicio derivada de la remoción notificada el 26 de abril de 2010 con efectos de la misma a partir del 30 de abril de 2010, le fue pagada en el mes de abril de 2010, a través de la nómina extraordinaria de asignaciones adicionales enero/marzo de 2010, por un monto neto de \$27,958.06 moneda nacional. En cuanto a los demás periodos y años es improcedente su reclamo, derivado del hecho de que con fecha 30 de abril de 2010 tuvo efectos la baja de la actora autorizada por el Comité de Gobierno y Administración, por tal motivo la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

demandante no generó el derecho correspondiente a las asignaciones adicionales futuras por la remoción de que fue objeto.

En relación con la demanda "*independiente*" que la actora hizo consistir en el pago de la indemnización constitucional, el pago de la antigüedad consistente en veinte días de salario por cada año de servicios, el pago de las horas extras, el demandado manifestó que no obstante de ser un reclamo excluyente de la reinstalación, era improcedente demandarlo por esta vía por las siguientes consideraciones.

La actora nunca fue despedida injustificadamente de su empleo, sino que por acuerdo del quince abril de dos mil diez, el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó la baja por pérdida de la confianza de Ingrid Esterai Guido Montes de Oca, Subdirectora de Área adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que advirtieran alguna causa que desvirtuara los motivos y fundamentos que la sustentaron.

Adicionalmente está el hecho de que la demandante fue una trabajadora de confianza al servicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en términos del artículo 8º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, se encuentra excluida de la aplicación de este ordenamiento legal

Por otra parte, la actora carece de acción y derecho para reclamar la antigüedad en el trabajo consistente en 20 días por cada año laborado conforme lo establecido en el artículo 50, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que es un beneficio que no está contemplado a favor de los servidores públicos que rigen sus relaciones laborales por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Máxime que a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión se les cubre por concepto de antigüedad una prestación denominada Prima Quinquenal por años de servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 segundo párrafo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Por último, en cuanto al pago de las horas extras manifestó que la actora carece de acción y derecho para demandarlas porque nunca las laboró, es decir, jamás generó el derecho al pago por tiempo extraordinario, por lo tanto de manera cautelar y sin que ello implique reconocimiento de acción o derecho alguno a favor de la actora, con fundamento en el artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional, opuso la excepción de prescripción



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

respecto de toda reclamación formulada o que formule la actora por concepto de pago de horas extras por un periodo diverso al comprendido entre el 16 de noviembre de 2011 (fecha de presentación de su primer escrito) y el 15 de noviembre de 2010, toda vez que las reclamaciones se encuentran prescritas al haber transcurrido en exceso el plazo de un año establecido por el precepto legal previamente invocado.

En relación con el capítulo de hechos manifestó:

"1.- El hecho 1 que se contesta es parcialmente cierto en cuanto a la fecha de ingreso, el puesto asignado y el salario, lo que no es cierto es el horario de trabajo, pues en el nombramiento otorgado en la parte posterior del mismo, se establece que la duración de la jornada es diurna en el horario fijado en el Acuerdo correspondiente, considerando que la jornada máxima semanal es de 40 horas. Ahora bien, la jornada diurna de conformidad con el artículo 21 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es aquella comprendida entre las seis y las veinte horas; en tanto que el artículo 22 de dicho ordenamiento legal, dispone que la jornada máxima sea de ocho horas. En ese sentido, el Acuerdo General de Administración 9/2000, vigente al momento de los hechos aludidos por la hoy actora, y en estricto apego a la legislación en comento, señaló lo siguiente: en su CONSIDERANDO SEGUNDO, que de conformidad con los artículos 123, apartado

B, fracción I, de la Carta Magna y 22 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la jornada diurna máxima de trabajo será de ocho horas; en el CONSIDRANDO TERCERO, se estipuló que conforme al artículo 21 de la ley reglamentaria señalada, la jornada diurna es aquélla comprendida entre las seis y las veinte horas; en el CONSIDERANDO CUARTO, se precisa que los artículos 180 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinan respectivamente a los trabajadores que son de confianza y de base; en el punto de ACUERDO PRIMERO, que la jornada de trabajo de los trabajadores de base, sería de ocho horas; y en el punto de ACUERDO SEGUNDO, se determinó que la jornada de trabajo de los trabajadores de base, sería de ocho horas; y en el punto de ACUERDO SEGUNDO, se determinó que la jornada de trabajo de los servidores públicos de confianza se rige por las cargas de trabajo y las necesidades del servicio de las oficinas judiciales y administrativas, y que los horarios podrían ser fijados por los titulares de éstas o por los superiores jerárquicos.

Del contenido de las normas antes referidas se aprecia con claridad, que por un lado, los trabajadores de base, laborarán ocho horas de trabajo en una jornada diurna, en tanto que los servidores públicos de confianza, su horario sería de conformidad a las cargas de trabajo y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

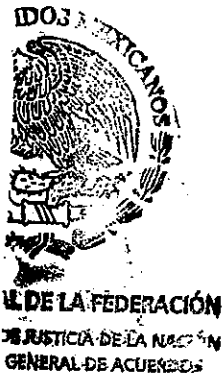
los titulares o superiores jerárquicos podrían fijar la jornada.

En ese orden de ideas, debe reiterarse y ratificarse en este apartado que la hoy actora jamás generó el derecho al pago por tiempo extraordinario.

2. El hecho 2 que se contesta es parcialmente cierto en cuanto al puesto asignado de Subdirector de Área, Rango B, puesto de confianza, lo que no es cierto es el salario pues es de \$39,940.08 M.N.

3.- El hecho 3 que se contesta no es cierto, aclarando que al reverso del nombramiento de cuatro de septiembre de dos mil ocho, por el que otorgó nombramiento de Subdirector de Área, Rango B, puesto de confianza, a la parte actora con efectos a partir del primero de septiembre de dos mil ocho, se especifica claramente que la jornada será diurna, cuyo horario será fijado en el Acuerdo correspondiente, se especifica también el salario y las funciones a desarrollar de conformidad con la cédula de funciones que al efecto debe obrar en cada expediente.

Ahora bien, la jornada diurna de conformidad con el artículo 21 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es aquella comprendida entre las seis y las veinte horas; en tanto que el artículo 22 de dicho ordenamiento legal, dispone que la jornada máxima sea de ocho horas. En ese sentido, el Acuerdo General



de Administración 9/2000, vigente al momento de los hechos aludidos por la hoy actora, y en estricto apego a la legislación en comento, señaló lo siguiente: en su CONSIDERANDO SEGUNDO, que de conformidad con los artículos 123, apartado B, fracción I, de la Carta Magna y 22 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado la jornada diurna máxima de trabajo será de ocho horas; en el CONSIDERANDO TERCERO, se estipuló que conforme al artículo 21 de la ley reglamentaria señalada, la jornada diurna es aquélla comprendida entre las seis y las veinte horas; en el CONSIDERANDO CUARTO se precisa que los artículos 180 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación determinan respectivamente a los trabajadores que son de confianza y de base; en el punto de ACUERDO PRIMERO, que la jornada de trabajo de los trabajadores de base, sería de ocho horas; y en el punto de ACUERDO SEGUNDO, se determinó que la jornada de trabajo de los servidores públicos de confianza se rige por las cargas de trabajo y las necesidades del servicio de las oficinas judiciales y administrativas, y que los horarios podrían ser fijados por los titulares de ésta o por los superiores jerárquicos.

Del contenido de las normas antes referidas se aprecia con claridad, que por un lado, los trabajadores de base, laborarán ocho horas de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

trabajo en una jornada diurna, en tanto que los servidores públicos de confianza, su horario sería de conformidad a las cargas de trabajo y los titulares o superiores jerárquicos podrían fijar la jornada.

En este orden de ideas, debe reiterarse y ratificarse en este apartado que la hoy actora tenía un puesto de confianza, partiendo de ello, el titular o sus superiores jerárquicos podrían modificar de acuerdo a las necesidades del servicio modificar éstos, por lo que, suponiendo sin conceder que hubiera existido la modificación no se estaría vulnerando condición de trabajo alguna.

4. En una falta de orden en los hechos de la demanda, ya que la actora repite el hecho número tres arábigo, se contesta el segundo hecho 3 en los siguientes términos: al ser apreciaciones subjetivas y unilaterales de la actora ni se afirman ni se niegan, por no ser hechos propios.

5. El hecho 4 que se contesta no es cierto. Lo que sí es cierto es que con fecha dieciséis de marzo de dos mil ocho la entonces Dirección General de Personal en el ámbito de sus atribuciones le notificó a la actora el inicio del procedimiento de baja por pérdida de la confianza a que hace referencia el artículo 42 del Acuerdo General de Administración V/2008. Las demás manifestaciones al ser apreciaciones



subjetivas y unilaterales de la actora ni se afirman ni se niegan, por no ser hechos propios, aclarando que la actora confunde el procedimiento de responsabilidad administrativa que es de naturaleza administrativa, con el procedimiento de baja por pérdida de confianza contemplado en el Acuerdo General V/2008 de naturaleza labora.

6. El hecho 5 que se contesta no es cierto. Lo que sí es cierto es que la entonces Dirección General de Personal en uso de sus atribuciones mediante oficio número DGP/DRL/194/2010 de fecha 12 de marzo de 2010, le notificó a la actora el inicio del procedimiento de baja por pérdida de la confianza a que hace referencia el artículo 42, fracción II, primer párrafo, del Acuerdo General de Administración V/2008, en dicho procedimiento la actora compareció y alegó lo que a su derecho correspondía. Las demás manifestaciones al ser apreciaciones subjetivas y unilaterales de la actora ni se afirman no se niegan, por no ser hechos propios, aclarando que la actora confunde el procedimiento de responsabilidad administrativa que es de naturaleza administrativa, con el procedimiento de baja por perdida de la confianza contemplado en el Acuerdo General V/2008 de naturaleza laboral.

7. El hecho 6 que se contesta es parcialmente cierto en cuanto a la fecha de baja de la actora.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

Lo que no es cierto es que dicha remoción haya sido arbitraria, contrario a lo expuesto por la actora su baja obedeció a lo acordado en la séptima sesión ordinaria celebrada el quince de abril de dos mil diez por el comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siendo pertinente señalar que conforme a lo dispuesto en el Artículo 123, apartado B, fracción XIV, constitucional, la estabilidad de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión está supeditada al principio de reserva de la ley y debido a que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no contempla dicha estabilidad para los trabajadores de confianza, el hecho de que haya previsto en un Acuerdo General de Administración V/2008, artículo 42 la necesidad de escuchar a los trabajadores de confianza antes de darlos de baja con el objeto de evitar arbitrariedades, no llega al extremo de otorgar estabilidad en el empleo a los trabajadores de confianza ni, por ende, el cese de estos únicamente puede realizarse cuando se realicen específicas causas justificadas de pérdida de la confianza, debiendo estimarse que para que el cese de un trabajador de confianza se apegue al marco jurídico vigente basta que el Comité de Gobierno y Administración haya advertido la existencia de una circunstancia que razonablemente revele que el titular de alguna



área de esta Suprema Corte carezca de los elementos para confiar en un trabajador de esa naturaleza.

8. El hecho 7 que se contesta no es cierto. Lo que sí es cierto es que la baja decretada con fecha 30 de abril de 2010 se sustentó en lo acordado en la séptima sesión ordinaria celebrada el quince de abril de dos mil diez por el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en base al procedimiento contemplado en el Acuerdo General de Administración V/2008.”

CUARTO. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil doce, María Antonieta del Campo Rodríguez compareció al juicio en su carácter de tercera interesada y manifestó que todos y cada uno de los hechos de la demanda le eran ajenos por lo que no tenía nada que controvertir ni complementar (Folio 234).

QUINTO. El dos de febrero de dos mil doce se llevó a cabo la audiencia que prevén los artículos 131, 132 y 133 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la que se admitieron y desahogaron las pruebas que cumplieron con los respectivos requisitos legales (fojas 242 a 256).

SEXTO. Seguido el juicio en todas sus fases procesales y una vez desahogadas las pruebas admitidas a las partes, por auto de veintiséis de abril de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

dos mil doce se declaró cerrada la instrucción en este conflicto de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y se ordenó turnar este expediente al representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, para la formulación del dictamen respectivo (fojas 362 y 363).

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte es competente para resolver este conflicto laboral, según lo disponen los artículos 123, apartado "B", fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 152, 153 y 160 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dado que se trata de un juicio promovido por una extrabajadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Director General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que entre otras prestaciones se le reincorpore en su puesto de trabajo, o bien, se le indemnice y se le paguen diversas prestaciones que dice se le adeudan.

SEGUNDO. En principio debe señalarse que la litis en el presente conflicto se constriñe a determinar si a la parte actora corresponde la acción y derecho para que se



le reincorpore en el trabajo que venía desempeñando o, en su caso, se le indemnice y se le paguen diversas prestaciones que dice se le adeudan; o bien, si como lo hizo valer el demandado, la acción principal referida es improcedente dado que en el caso a estudio operó la prescripción atendiendo a la fecha en que se le notificó la baja del servicio 26 de abril de 2010 con efectos a partir del 30 de abril de 2010 y la fecha en que presentó su demanda ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación fue mediante escritos recibidos el 16 de noviembre y 1º de diciembre, ambos del año 2011, es decir, se excedió en el tiempo para la interposición de su reclamación.

TERCERO. En los términos en que quedó planteada la litis del presente conflicto de trabajo se considera que procede analizar en primer término la excepción de prescripción que opuso el titular demandado en relación directa con la acción principal de reinstalación, ya que tal excepción, por su naturaleza es de carácter perentorio, toda vez que tiende a destruir la acción intentada; en esas circunstancias, se tiene en cuenta que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone en su artículo 113, fracción II, inciso a), que prescriben en cuatro meses en caso de despido o suspensión injustificados, las acciones de los trabajadores al servicio del Estado para exigir la reinstalación en su empleo o la indemnización que la ley les concede ***"contados a partir del momento en que***



CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

sea notificado el trabajador, del despido o suspensión".

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Como se puede observar, los términos legales previstos para computar el plazo de la prescripción, en el caso a estudio, son claros, al disponer en forma categórica los supuestos en que un trabajador puede ejercer la acción por la que opte (reinstalación o indemnización), para cuyo ejercicio dispondrá de cuatro meses contados a partir del momento en que sea notificado del despido o suspensión.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
AGENCIA GENERAL DE ACUERDO

Asimismo, se tiene en cuenta que el plazo de cuatro meses para que opere la prescripción de la acción para demandar la reinstalación o la indemnización legal contado a partir del día en que se notifica el cese o la suspensión, se encuentra totalmente justificado; además, porque por lo común, en el ámbito burocrático se notifica al trabajador su cese o suspensión en una fecha, con efectos a partir de una posterior, razón por la que el legislador previó un margen que duplica el plazo de la Ley Federal del Trabajo (artículo 518), en estos casos, para que el afectado pueda estar en aptitud de preparar adecuadamente su defensa, máxime que en materia burocrática a la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el actor, tal como lo dispone la parte final del artículo 129 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

En ese orden de ideas, se tiene en cuenta que dentro del material probatorio que se allegó en el

Conflicto de Trabajo 4/2011-C, el cual se analiza a la luz de las reglas establecidas en el artículo 137 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, obra la documental consistente en el original del aviso de baja por pérdida de la confianza en el puesto de Subdirectora de Área, Rango B, con efectos a partir del día treinta de abril de dos mil diez, notificado a la ahora actora el **veintiséis de abril de dos mil diez**, según leyenda de recibido y firma autógrafa que consta en la parte inferior derecha del oficio DGP/DRL/268/2010, visible en la foja 98 del expediente número 60944 a nombre de Ingrid Esterai Guido Montes de Oca, aportado por el titular demandado.

En este sentido, se hace notar que la prueba documental mencionada en el párrafo anterior, también fue ofrecida por la parte actora en su numeral VI (foja 102) visible en el anexo uno de las pruebas, por lo que, la fecha de notificación de la baja es un hecho admitido por ambas partes, el cual además se corrobora con la confesional de la actora quien al absolver la posición cuatro aceptó que causó baja del servicio el treinta de abril de dos mil diez.

Las constancias probatorias referidas, permiten concluir que a la actora se le notificó su baja el **veintiséis de abril de dos mil diez** con efectos a partir del día treinta siguiente, razón por la que el término de cuatro meses que prevé el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

para demandar la reinstalación o indemnización se debe contar a partir del momento de dicha notificación, de ahí que válidamente se pueda concluir que los cuatro meses para ejercer la acción de reinstalación transcurrieron del veintiséis de abril de dos mil diez al veinticinco de agosto de ese año, por lo que si la parte actora presentó su escrito inicial de demanda ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, el **dieciséis de noviembre del año dos mil once**, según se aprecia en el sello fechador visible a foja 1 del expediente 4/2011-C, es evidente que había transcurrido en exceso el término legal que expresamente prevé el precepto indicado, máxime que se estima que el hecho que en su caso generó la acción para demandar laboralmente la reinstalación, es la decisión de separarla del empleo que, se insiste, lo fue la pérdida de la confianza notificada el veintiséis de abril de dos mil diez y no la decisión que en su momento emitió el Tribunal Pleno el diecinueve de septiembre de dos mil once, mediante la cual declaró improcedente el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 65/2008, ya que la baja de la actora en ningún momento estuvo sujeta o vinculada a la resolución que se emitiera en la vía administrativa, por lo que esta última determinación, no puede servir de sustento para retrotraer la vigencia de un derecho que no ejercitó en el término legal de cuatro meses.

En otras palabras, en el aviso de baja ofrecido por ambas partes consta que se efectuó: *"En términos de lo*

establecido en el artículo 42, fracción IV, del Acuerdo General de Administración V/2008, nos permitimos notificar a usted el acuerdo tomado por el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la séptima sesión ordinaria celebrada el quince de abril del año en curso y el oficio número DGCCJEH-J-322-04-2010 de fecha 20 de abril de 2010, suscrito por el Secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo y el Director General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos de este alto Tribunal, mediante los cuales se ordena su baja por pérdida de la confianza en el puesto de Subdirectora de Área, Rango B, con efectos a partir del treinta de abril de dos mil diez.- Sin otro particular, reciba un cordial saludo". Es decir, en ningún momento se citó que la baja obedeciera al hecho de que ésta se encontrara involucrada en el procedimiento de responsabilidad administrativa que la actora refiere, por lo que los cuatro meses para demandar deben computarse a partir de la fecha en que se le notificó la baja a la actora.

El criterio anterior tiene apoyo en lo conducente, en la tesis jurisprudencial 21/96 que dictó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 81/95, cuyo rubro, texto y datos de publicación dicen:

*"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA A
CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

LAS ACCIONES EN CASO DE CESE O SUSPENSIÓN. De conformidad con el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las acciones para demandar la reinstalación en la categoría desempeñada, o bien, la indemnización de ley, prescriben en cuatro meses contados a partir del momento en que el empleado público sea notificado del despido o suspensión, independientemente de la fecha en que se materialice cualquiera de estos actos, pues de atender este último criterio, significaría apartarse del verdadero sentido de la ley, hasta el extremo de integrar una norma totalmente distinta a la disposición aplicable al caso concreto, cuando no da lugar a otras interpretaciones.” (Novena Época; Registro: 200607; Instancia: Segunda Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Mayo de 1996; Materia(s): Laboral; Tesis: 2a./J. 21/96; Página: 210).



En consecuencia, al haberse declarado prescrita la acción principal que se hizo consistir en la “reincorporación o instalación” en el puesto que venía desempeñando, procede hacer la misma declaratoria respecto de la acción “independiente” consistente en el pago de la indemnización constitucional, lo anterior en virtud de que, por las razones expuestas se concluye que ambas están prescritas, ya que de conformidad con el artículo 113, fracción II, inciso a) de la ley de la materia,

el término de cuatro meses es para demandar una u otra, de ahí que ambas acciones se consideren prescritas.

En ese orden de ideas, tampoco procede el pago de los salarios vencidos, debido a que se entiende que éstos son una consecuencia inmediata y directa de la acción originada en el despido por causas imputables al patrón, en consecuencia, para que se condene a su pago, se debe acreditar la separación injustificada en que se funda dicha acción, de ahí que si en el caso a estudio, la acción principal se declaró prescrita, la conclusión directa es que la acción del pago de los salarios vencidos reclamados resulte improcedente al seguir la suerte de la principal.

Sobre este tema resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial 502 emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y datos de publicación dicen:



“SALARIOS VENCIDOS, DERECHO AL PAGO DE LOS, EN CASO DE EJERCICIO DE LAS ACCIONES POR DESPIDO. El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, establece que el trabajador despedido injustificadamente, podrá solicitar, a su elección, que se le reinstale o se le indemnice con el importe de tres meses de salario, y que tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo; por tanto, conforme a lo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

establecido en este precepto legal, se entiende que los salarios vencidos son una consecuencia inmediata y directa de las acciones originadas en el despido o en la rescisión del contrato por culpa del patrón, por lo que para que se condene a su pago, basta que el trabajador ejercite cualquiera de las dos acciones principales señaladas y prospere, para que por consecuencia tenga derecho a que se le otorgue en forma concomitante o correlativa la prestación derivada correspondiente a los salarios vencidos.” (Séptima Época; Registro: 915711; Instancia: Cuarta Sala.- Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 2000 Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Laboral Tesis: 574; Página: 466).



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS

Por otra parte, de la lectura de la demanda laboral se aprecia que la actora, además de la acción principal de reinstalación y los salarios vencidos, así como de la subsidiaria de pago de indemnización que ya fueron analizadas en párrafos precedentes, también reclamó el pago de diversas prestaciones posteriores a la fecha de su separación del empleo.

En efecto, en autos consta que se demanda el pago de las vacaciones y prima vacacional desde el treinta de abril de dos mil diez hasta que se le reincorpore o instale en su puesto; también reclamó el pago de los estímulos e incrementos salariales que se hayan realizado al puesto que venía desempeñando; el pago de los aguinaldos correspondientes desde el año dos mil diez y hasta el

momento en que se le reincorporara o instalara en su plaza; el pago de la ayuda de despesa desde dos mil diez hasta que se le reincorporara o instalara en su puesto; y, el pago de las asignaciones adicionales desde el momento de la separación de su plaza y hasta que se le reincorporara o instalara en la misma (fojas 97 y 98 del expediente 4/2011-C).

En relación con las prestaciones reclamadas como parte accesoria o vinculada de manera directa con la procedencia de la acción principal de reinstalación, debe decirse que al no haber prosperado ésta debido a que se ejerció fuera del plazo legal previsto, trae como consecuencia que se declaren improcedentes las reclamaciones secundarias porque tienen su origen en la procedencia de la acción principal.

No pasa desapercibido que dentro de las prestaciones referidas, en tres de ellas (vacaciones y prima vacacional, aguinaldo y asignaciones adicionales) la parte actora las reclamó desde el año dos mil diez hasta el momento que se le reincorporara o instalara en su empleo, así como que en autos está acreditado que la actora laboró del primero de enero al treinta de abril de dos mil diez, lo que en principio daría lugar al pago proporcional de tales prestaciones por el periodo que devengó esos conceptos.

Sin embargo, no se actualiza el pago proporcional debido a que el titular demandado justificó la excepción de pago que en su oportunidad hizo valer dentro de su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

escrito de contestación a la demanda, al demostrar que a la actora le fueron cubiertos esos conceptos en los montos y términos siguientes:

1. Pago proporcional de las vacaciones y la prima vacacional correspondientes al año dos mil diez.

La actora solicitó el 19 de mayo de 2010, el pago las vacaciones y la prima vacacional proporcionales al tiempo laborado en el año en cita (copia simple a esta contestación como prueba documental obra a foja 178 del expediente laboral, sin que ésta se haya objetado por la parte actora), lo que generó que en el pago de la nómina normal del 1 de junio al 15 de julio de 2010, se abonara el monto neto de \$12,556.51 (doce mil quinientos cincuenta y seis pesos 51/100 moneda nacional), como consta en la documental que en copia certificada obra visible a fojas 315.

2. Pago proporcional del aguinaldo correspondiente al año dos mil diez.

Mediante "Solicitud para el cobro de AGUINALDO" de fecha 19 de mayo de 2010 (copia simple a esta contestación como prueba documental obra a foja 179 del expediente laboral, sin que ésta se haya objetado por la parte actora), la actora requirió al demandado el pago proporcional que correspondía al año en cita, lo que generó el pago mediante las nóminas extraordinarias de aguinaldo primera y segunda parte por un monto neto en

la primera exhibición de \$13,504.11 (trece mil quinientos cuatro pesos 11/100 moneda nacional), y en la segunda exhibición un monto neto de \$2,441.86 (dos mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 86/100 moneda nacional), como consta en la documental que en copia certificada se encuentra visible a fojas 316 de los autos.

3. Pago de la prestación denominada asignaciones adicionales proporcional al tiempo laborado en el año dos mil diez.

A la actora le fue cubierta la parte que le correspondía, pues al causar baja del servicio derivada de la remoción notificada el 26 de abril de 2010 con efectos de la misma a partir del 30 de abril de 2010, le fue pagada en el mes de abril de 2010, a través de la nómina extraordinaria de asignaciones adicionales enero/marzo de 2010, por un monto neto de \$27,958.06 (veintisiete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 06/100 moneda nacional), como consta en la documental que en copia certificada obra visible a fojas 314.

Cabe destacar que los montos correspondientes a los pagos proporcionales referidos se depositaron en la modalidad de abono a cuenta (6250746015) que para ese efecto tenía la actora en el Banco HSBC.

En otro orden de ideas, se advierte que la actora también demandó el pago de la prestación denominada



CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ayuda de despensa desde el dos mil diez hasta que se le reincorporara o instalara en su plaza.

Al respecto, si bien en párrafos precedentes ya se hizo pronunciamiento del porqué la actora no tiene derecho al pago de esta prestación con efectos posteriores a su separación, lo cierto es que en relación con el tiempo proporcional laborado en el año dos mil diez tampoco se actualiza ningún derecho en virtud de que el demandado justificó su excepción en el sentido de que se trata de un beneficio aplicable al personal que se encuentra activo en la fecha de pago que fue en el mes de noviembre de 2010, lo anterior conforme a los lineamientos de pago exhibidos en juicio, los cuales fueron aprobados por el Comité de Gobierno de este Alto Tribunal, por lo tanto, si la actora causó baja del servicio derivada de la remoción notificada el 26 de abril de 2010 con efectos de la misma a partir del 30 de abril de 2010, es de concluirse que no se encontraba en los supuestos de norma para ser beneficiaria del pago, lo anterior deriva de los Lineamientos Homologados sobre las Remuneraciones para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación (punto V) el cual no fue objetado por la actora, motivo por lo que tampoco procede el pago proporcional del año dos mil diez.

Como parte de la demanda que *independientemente* reclamó la actora para el caso de que no fuera reincorporada o instalada en su plaza, se advierte que además del pago de la indemnización



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

constitucional -que ya se trató en párrafos anteriores-, la extrabajadora también demandó el pago de la antigüedad en el trabajo consistente en 20 días por cada año laborado conforme a lo establecido en el artículo 50 fracción II de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria y el pago de la prima de antigüedad en el trabajo consistente en 20 días por cada año laborado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria.

En relación con el pago veinte días por año se estima que al no prosperar la acción principal, ésta sigue su suerte ya que tratándose de la separación de un trabajador por causa injustificada, éste puede optar por ejercitar dos acciones: la de indemnización por despido injustificado, o la de reinstalación, las cuales tienen el mismo hecho generador, esto es, la separación de sus labores sin justificación para ello. Ahora bien, la prestación consistente en veinte días de salario por cada año de servicios prestados tiene la finalidad de resarcir al trabajador del perjuicio ocasionado por no poder seguir laborando por una causa ajena a su voluntad. Por tanto, el pago de la referida prestación debe reclamarse dentro del término de los cuatro meses siguientes a la separación, previsto como regla especial en el numeral 113, fracción II, inciso a) de la legislación burocrática, dado que su pago no puede exigirse autónomamente, por tratarse de una indemnización por la separación del trabajador, de ahí que al haberse declarado prescrita la acción principal, la accesoria corra la misma suerte.

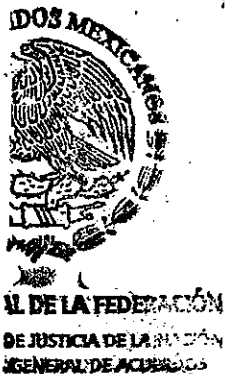


CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por otra parte, en relación con el pago de la prima de antigüedad consistente en 20 días por cada año laborado, que la actora demanda con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, debe decirse que la reclamación es improcedente toda vez que ésta laboró bajo el régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, razón por la que no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad establecida en el precepto en cita, como lo resolvió, en la parte modular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 21/2012, cuyo rubro, texto y datos de publicación dicen:

"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. SI SUS TRABAJADORES LABORARON BAJO EL RÉGIMEN DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, NO TIENEN DERECHO A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Conforme al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 50/2006, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA



DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", un trabajador de un organismo descentralizado de carácter federal, cuya relación laboral siempre se ha regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no tiene derecho a los beneficios por antigüedad establecidos en los dos apartados del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tal extremo no está previsto en ninguna norma constitucional o legal, y tampoco puede apoyarse en la jurisprudencia P./J. 1/96, de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO ES INCONSTITUCIONAL.", toda vez que tal criterio no produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró la relación laboral. Por tanto, si un trabajador de un organismo descentralizado federal laboró bajo el régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo." (Décima Época; Registro: 2000408; Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; Materia(s): Laboral; Tesis: 2a./J. 21/2012 (10a.); Página: 498).



CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Finalmente, se analiza la última de las prestaciones que la actora demandó como *independientes* a su acción principal, consistente en el pago de las horas extras que dijo haber laborado en promedio de cuatro horas por día y en las comisiones que le fueron encomendadas en fines de semana.

Al respecto el titular demandado opuso la excepción de prescripción con fundamento en lo previsto por el artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional, respecto de toda reclamación formulada o que formule la actora por concepto de pago de horas extras por un periodo diverso al comprendido entre el dieciséis de noviembre de dos mil once (fecha de presentación de su primer escrito) y el quince de noviembre de dos mil diez, toda vez que las reclamaciones se encuentran prescritas al haber transcurrido en exceso el plazo de un año establecido por el precepto legal invocado.



En el caso a estudio, como ya se ha precisado, el último día que la actora prestó sus servicios fue el treinta de abril de dos mil diez y presentó su escrito inicial de demanda el dieciséis de noviembre de dos mil once, por lo que la reclamación del pago de horas extras que, en su caso, pudo haber demandado se retrotrae al quince de noviembre de dos mil diez, por ser la fecha que corresponde al año inmediato anterior a la presentación de la demanda, en consecuencia, se estima que el titular

demandado aportó los datos suficientes para tener por cumplida la carga de precisar los elementos necesarios para declarar que en el caso a estudio opera la prescripción que se hizo valer con base en lo previsto en el artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, motivo por el que se declara la improcedencia de esta prestación.

El criterio anterior tiene apoyo por analogía, en la jurisprudencia 49/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el siguiente rubro, texto y datos de publicación.

"PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE OPONE TAL EXCEPCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITAN A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SU ANÁLISIS. Si bien la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada requiere que ésta precise los elementos que permitan a la Junta de Conciliación y Arbitraje realizar el estudio correspondiente, como ocurre con los casos específicos contemplados en los artículos 517 a 519 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de los cuales se deben allegar datos que sólo el demandado conoce, no sucede lo mismo cuando se trata de la regla genérica de prescripción a que alude el diverso artículo 516 de la propia legislación laboral, que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

opera, entre otros supuestos, cuando se demanda el pago de prestaciones periódicas, como pensiones por varios años, pues aun cuando subsiste la obligación de proporcionar los elementos que conforman la excepción de prescripción para que la mencionada Junta pueda realizar su análisis, basta con que el demandado señale, por ejemplo, que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda para que se tenga por cumplida la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la prescripción, con independencia de que se mencione o no el referido numeral 516, puesto que al particular le corresponde decir los hechos y al juzgador el derecho (Novena Época; Registro: 186747; Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Junio de 2002; Materia(s): Laboral; Tesis: 2a./J. 49/2002, Página: 157).

Por lo expuesto, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos del 152 al 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. La actora **INGRID ESTERAÍ GUIDO MONTES DE OCA** no acreditó su acción y el titular demandado sí justificó sus defensas y excepciones, por lo que se absuelve de la reinstalación y del pago de las vacaciones, la prima vacacional, los estímulos e

incrementos salariales, los aguinaldos, la ayuda de despensa y las asignaciones adicionales reclamadas, así como de las acciones independientes que se hicieron consistir en el pago de la indemnización constitucional, de la antigüedad de veinte y doce días por año y de las horas extras reclamadas, lo anterior de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta resolución.

SEGUNDO. Devuélvase el expediente relativo a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, para los efectos de las notificaciones respectivas; y, en su momento, lo archive como asunto concluido.

Cúmplase.

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente Juan N. Silva Meza.

Firman el señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Secretario General de Acuerdos que da fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2011-C.

EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.

LC. RAFAEL COELLO CETINA



La presente foja es la parte final de la sentencia en el Conflicto de Trabajo 4/2011-C, suscitado Ingrid Esterai Guido Montes de Oca y el Director General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.